



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: MARINA DEL SOCORRO BOTERO YEPES
Demandado: PORVENIR S.A.
Procedencia: JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA n.º 108
Radicado n.º: 05001-31-05-012-2017-00968-01 (O2-22-127)

En Medellín, a los veintiocho (28) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA2011567-2020 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir los recursos de apelación propuestos por las demandantes, dentro del proceso ordinario instaurado por **MARINA DEL SOCORRO BOTERO YEPES** en contra de **PORVENIR S.A.**, al cual se acumuló el proceso ordinario laboral promovido por **MARÍA TERESA ROJAS VELÁSCO**, proceso principal radicado bajo el n.º 05001-31-05-012-2017-00968-01 (O2-22-127), y el acumulado bajo el n.º 05001-31-05-006-2017-00818-00.

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda,

1. ANTECEDENTES

Mediante gestor judicial, la señora **MARINA DEL SOCORRO BOTERO YEPES** persigue el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por **DARÍO DE JESÚS CARO FERNÁNDEZ** (q.e.p.d.), los intereses moratorios, la indexación y las costas procesales, con fundamento en que convivió exclusiva y permanentemente con el precitado desde junio de 2010 hasta el momento de su muerte acaecida el 14 de enero de 2017, lapso durante el cual ella dependió económicamente de él; el 11 de mayo de

2017 solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, misma que le fue denegada mediante comunicación del 22 de julio de 2017.

1.1 TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda fue admitida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 6 de septiembre de 2017 (doc. 01 pág. 52), y ordenando su notificación y traslado a la parte accionada.

Luego de su notificación (ibíd. pág. 66), PORVENIR S.A. contestó la demanda principal el 30 de enero de 2018 (ibíd. pág. 74 y ss.) a través de poderhabiente judicial, quien únicamente se opuso a las pretensiones de reconocimiento de intereses moratorios, indexación y costas procesales, en razón a que la negativa al reconocimiento pensional se dio porque dos personas se presentaron a reclamar la pensión alegando ser compañeras permanentes supérstites y, por tanto, concluye que el conflicto debe ser dirimido por esta jurisdicción, a la vez de formular las excepciones de mérito que denominó: buena fe, y prescripción.

Por auto del 19 de febrero de 2019 (ibíd. pág. 157), el juzgado de origen dispuso la acumulación del proceso con radicado único nacional n.º 05001-31-05-006-2017-00818-00, mismo que fue remitido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 12 de marzo de 2019 (doc. 02 pág. 185).

Al interior del proceso radicado n.º 05001-31-05-006-2017-00818-00, MARÍA TERESA ROJAS VELÁSICO pretendía a través de vocero judicial (doc. 02 pág. 8 y ss.), el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por DARÍO DE JESÚS CARO FERNÁNDEZ (q.e.p.d.), los intereses moratorios o, en subsidio, la indexación de las condenas, como las costas procesales, con fundamento fáctico en que convivió con el causante desde 1989 hasta su fallecimiento, ocurrido el 14 de enero de 2017, compartiendo techo, lecho y mesa; y que el 22 de junio de 2017 solicitó la pensión de sobrevivientes, la que le fue negada por comunicación del 27 de julio de 2017 por haberse presentado otra reclamante.

Demanda acumulada que fue admitida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 13 de diciembre de 2017 (doc. 02 pág. 43), y una vez notificada PORVENIR S.A. (ibíd. pág. 78), dio respuesta a la demanda el 25 de mayo de 2018 por intermedio de apoderada judicial (ibíd. pág. 79 y ss.), oponiéndose únicamente

a las pretensiones de reconocimiento de intereses moratorios, indexación y costas procesales, en razón a que la negativa al reconocimiento pensional se dio porque dos personas se presentaron a reclamar la pensión alegando ser compañeras permanentes supervivientes y por ello el conflicto debe ser dirimido por la jurisdicción, al tiempo de formular las excepciones de mérito que denominó: buena fe, y prescripción.

1.2.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida 7 de febrero de 2022 (doc. 16), oportunidad en la cual la cognoscente de instancia declaró que el causante DARÍO DE JESÚS CARO FERNÁNDEZ dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus posibles beneficiarios, pero absolvió a la AFP PORVENIR S.A. de todas las pretensiones incoadas en su contra por MARINA DEL SOCORRO BOTERO YEPES y por MARÍA TERESA ROJAS VELÁSCO, a la vez de gravar en costas a las demandantes y en favor de la AFP accionada.

1.3 APELACIÓN

Decisión que fue recurrida oportunamente en apelación por la poderhabiente judicial de la demandante BOTERO YEPES, en cuyo sustento afirmó que su poderdante convivió exclusiva, continua e ininterrumpidamente con el causante durante más de 6 años, lo que se verifica con la denuncia que la demandante hizo ante la Fiscalía, en donde plasmó la dirección en la que residía con el causante, con la certificación de la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul (FHSVP) que indica que ella llevó al causante a la Clínica San Vicente, y con la prueba testimonial aportada que dio cuenta de su convivencia, de la dependencia económica de la demandante respecto del causante y del ánimo de éste de protegerla.

A su turno, el vocero judicial de la demandante ROJAS VELÁSCO, apeló la decisión de primera instancia, tras señalar que está demostrada la convivencia de su representada con el causante, según las afiliaciones como beneficiaria en salud y caja de compensación familiar, y que con la prueba testimonial se verifica que su representada y el causante convivieron como compañeros permanentes desde 1989 hasta su fallecimiento, en la misma residencia. En adición, afirma que el causante no residió en ninguna otra parte diferente a la residencia que sostuvo con su poderdante y que el hecho de que al momento del fallecimiento la señora ROJAS VELÁSCO no haya podido llegar a la clínica, no desvirtúa la convivencia.

1.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

En la oportunidad legal para alegar de conclusión, el apoderado judicial de la demandada, allegó los alegatos de conclusión en los que expresa que respecto la convivencia de la señora MARIA TERESA ROJAS, no se logró probar una convivencia vigente para el momento del deceso, pues para la data de la muerte no se probó la ayuda mutua ni la vocación de ayuda mutua y ánimo de conformar una familia, y frente a la señora MARINA DEL SOCORRO BOTERO YEPES, adujo que únicamente se probó una convivencia de 4 años, término insuficiente para acceder a la prestación solicitada.

Por su parte, la mandataria judicial de la demandante BOTERO YEPES, alegó que la prueba testimonial y la documental dan cuenta de la convivencia de la pareja CARO BOTERO hasta el momento del fallecimiento, y que en todo caso, cuando el fallecido es afiliado no requiere que se demuestre el requisito de la convivencia.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la demandante y la interviniente excluyente, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.1. PROBLEMA JURÍDICO:

La Sala procederá a dilucidar ¿Si MARINA DEL SOCORRO BOTERO YEPES y MARÍA TERESA ROJAS VELÁSCO reúnen los requisitos legales para ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes causada por el señor DARÍO DE JESÚS CARO FERNÁNDEZ (q.e.p.d.) en calidad de compañeras permanentes supérstites? ¿En caso positivo, deberá verificarse en qué proporción y cuantía le corresponde dicha prestación a MARINA DEL SOCORRO BOTERO YEPES y a MARÍA TERESA ROJAS VELÁSCO, y si se causaron los intereses moratorios pretensos?

2.2. TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS.

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio**, en tanto ni MARINA DEL SOCORRO BOTERO YEPES, ni MARÍA TERESA ROJAS VELÁSICO acreditaron los requisitos legales para ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañeras permanentes supérstites, a la par de **revocatorio** en cuanto a la orden de acrecimiento pensional a favor de los hijos derechohabientes, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.2.1. Pensión de sobrevivientes

Al *sub lite* le es aplicable el régimen legal contenido en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, dado que el causante falleció el 14 de enero de 2017 (doc. 01 pág. 20).

En orden a lo anterior, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez que fallezca. Punto sobre el cual no hay controversia, puesto que la AFP demandada aceptó que el afiliado fallecido DARÍO DE JESÚS CARO FERNÁNDEZ cumplió con los requisitos legales para causar la pensión de sobrevivientes a favor de sus posibles beneficiarios (doc. 01 pág. 81 y 82), a más de que así fue declarado por la *a quo* sin que tal aspecto hubiese sido reprochado por las partes procesales.

Acreditado que el fallecido sí dejó causado el derecho para que sus posibles beneficiarios puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, conviene resaltar el contenido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, atinente a quiénes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, entre otros, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera(o) permanente supérstites, siempre y cuando dicho beneficiario (a) a la fecha de fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad y acredite la existencia de vida marital con el causante por espacio mínimo de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento, siendo que la acreditación de tales requisitos es carga procesal de los eventuales beneficiarios, tal como lo ha reiterado la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia SL169-2021, en la que sostuvo que la convivencia le incumbe probarla a quien afirma el hecho.

En este punto, resulta menester hacer precisión de que si bien a partir de la sentencia SL1730-2020 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia adoptó una nueva postura, al adocrinar que el tiempo mínimo de convivencia de 5 años únicamente es exigible en el caso en que el causante sea pensionado, la Sala se aparta, con todo respeto, de dicho criterio, al estimar que tal línea de interpretación contraviene el principio constitucional de igualdad, por imponer un trato diferencial a los cónyuges y compañeros permanentes del fallecido según sea afiliado o pensionado el de cujus, sin que tal discriminación se corresponda con los propósitos de pensión de sobrevivientes o con algún fin constitucional superior (SU-149 de 2021); a más de que desconoce los mandatos constitucionales de universalidad y sostenibilidad financiera del sistema pensional, al incrementar desproporcionadamente el número de reconocimientos de pensiones de sobrevivientes¹, lo que redundaría en una afectación irrazonable de los reducidos recursos con que el sistema cuenta para garantizar los derechos de quienes legítimamente han accedido a una pensión (SU-149 de 2021); y que, la interpretación en cita resulta abiertamente contraria al precedente constitucional asentado por el máximo tribunal de lo constitucional desde la Sentencia SU-428 de 2016, según el cual *“el requisito de la convivencia durante los últimos cinco años anteriores a la muerte para el compañero o cónyuge supérstite, con el fin de proteger a los beneficiarios legítimos de ser desplazados por quién solo busca aprovechar el beneficio económico. (...) tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes, de manera vitalicia, la compañera permanente supérstite **del afiliado** que tenga 30 años o más de edad, al momento del fallecimiento de este, quien deberá demostrar que hizo vida marital con el causante hasta su muerte y, por lo menos, durante los cinco años anteriores a esta”*.

Por manera que, en derredor de este ítem, la Sala acogerá el precedente constitucional, para exigir los cinco (5) años de convivencia en los casos no sólo de pensionados sino afiliados fallecidos, según lo dispone el precedente asentado desde la Sentencia SU-428 de 2016 y reiterado y puntualizado más recientemente en Sentencia SU-149 del 21 de mayo de 2021.

De forma que, el asunto que amerita un análisis probatorio exhaustivo es si las señoras MARINA DEL SOCORRO BOTERO YEPES y MARÍA TERESA ROJAS VELÁSICO cumplen con el requisito de la convivencia en calidad de compañeras permanentes supérstites, para lo cual deberá establecerse si demostraron que convivieron

¹ Según el Comunicado 18 del 21 de mayo de 2021 de la Corte Constitucional, “(...) el pasivo pensional aumentaría en 461 %, según estimaciones aportadas en sede de revisión.”

ininterrumpidamente con el causante, como mínimo en el lapso comprendido entre el **15 de enero de 2012** y el **14 de enero de 2017**.

Ello así, de cara al estudio de la convivencia de MARÍA TERESA ROJAS VELÁSCO con el fallecido LUIS ALBERTO CARO FERNÁNDEZ, tenemos que no hay duda en que sostuvieron una relación de compañeros permanentes cuando menos desde el año 1989, pues así lo declaró extraprocesalmente el mismo causante el 3 de enero de 2006 (doc. 02 pág. 39), el 28 de marzo de 2008 (doc. 01 pág. 113) y el 28 de febrero de 2013 (doc. 01 pág. 111 y 112). Empero, también se desprende de la documental, que para el 6 de agosto de 2014, el causante la retiró a la señora ROJAS VELÁSCO de su grupo familiar ante la EPS SURA, según cuenta el certificado obrante en el legajo (doc. 02 pág. 31 y 32, y doc. 13 pág. 5).

Luego, se advierte que para el 11 de enero de 2017 a las 6:32 horas, el causante consultó el servicio de urgencias médicas de la FHSVP, acompañado de la señora MARINA DEL SOCORRO BOTERO YEPES, quien se identificó como la “esposa” del causante (doc. 10 pág. 5), de lo que se sigue que para tal fecha y desde el 6 de agosto de 2014 el causante no convivía ya con MARÍA TERESA ROJAS VELÁSCO. Es decir, que al retirar a la señora BOTERO YEPES como su beneficiaria en la EPS, se concluye sin hesitación alguna que, para el 6 de agosto de 2014 la relación de compañeros permanentes del causante y la señora BOTERO YEPES había terminado por la real y efectiva intención del causante de finalizar su vínculo, y no por una simple pelea de pareja pasajera, lo que implica, cuando menos, que para tal data se produjo una interrupción en la convivencia, con independencia de si posteriormente el causante y la demandante reanudaron la relación de pareja y la convivencia.

No soslaya la Sala, que también obra en el plenario una certificación de la caja de compensación familiar de Antioquia (Comfama), en la que se indica que el causante estuvo afiliado a dicha entidad hasta el 23 de diciembre de 2016, y que para tal fecha aún figuraba como su “cónyuge” beneficiaria la señora MARÍA TERESA ROJAS VELÁSCO (doc. 02 pág. 33), empero, tal documento ha de analizarse de conformidad con las máximas de la experiencia, especialmente, teniendo en cuenta que las personas no suelen prestar mucha atención a sus beneficiarios en el sistema de compensación familiar, por tratarse de un sistema cuyos beneficios no son tan recurridos ni apremiantes, a diferencia de las prestaciones asistenciales y económicas que reconoce el sistema de seguridad social en salud, que tienen un carácter prevalente. Es por ello, que ha de atribuirse mayor mérito probatorio a la certificación de beneficiarios de la EPS que a la

de la caja de compensación, atendiendo a que las personas afiliadas suelen tener actualizados los datos de sus beneficiarios en salud que sus beneficiarios ante la caja de compensación familiar. Además de que, en últimas, la certificación de Comfama tampoco certifica que la señora ROJAS VELÁSCO hubiere convivido como compañera permanente con el causante hasta el 14 de enero de 2017, en tanto el causante estuvo afiliado a dicha entidad apenas hasta el 23 de diciembre de 2016, con mayor razón si se tiene en cuenta que desde el 11 de enero de 2017, el causante estuvo recluido en el servicio de urgencias del FHSVP sin que la señora ROJAS VELÁSCO hubiere concurrido a acompañarlo en ningún momento (doc. 10 pág. 5).

De igual forma, alega la alzada que lo reflejado en la certificación de la FHSVP se debió a que la señora ROJAS VELÁSCO no pudo acompañar al causante porque éste llegó al servicio de urgencias médicas por un paro cardíaco que padeció mientras estaba en la calle y no en la casa de la señora ROJAS, afirmación poco creíble, habida cuenta que el causante estuvo en el servicio de urgencias médicas durante 4 días, desde 11 hasta el 14 de enero de 2017 (doc. 10 pág. 5), sin que en tal interregno se hubiere registrado en la FHSVP otra persona diferente a la señora BOTERO YEPES alegando ser la pareja sentimental del enfermo. En todo caso, refulge palmar que las aserciones de la alzada carecen de soporte acreditativo suficiente, según las cuales el paro cardíaco que padeció el causante acaeció estando éste en la calle, en tanto no obra ningún material probatorio que pueda dar fe de tal circunstancia, siendo que la carga de la prueba de tal afirmación le concernía a la parte que la alega, según lo preceptuado en el artículo 167 del CGP.

Frente a la testimonial arrimada, no desconoce la Sala que SONIA NAYELLY TORO (min. 1:59:00 y ss.) y AMPARO DEL SOCORRO CARO FERNÁNDEZ (min. 3:01:00 y ss.) afirmaron que la convivencia de la pareja CARO ROJAS se dio ininterrumpidamente hasta la fecha del óbito; sin embargo, tales atestiguaciones se encuentran en abierta contradicción a lo indicado en la prueba documental recabada, según la cual fue el propio causante para el 6 de agosto de 2014 (doc. 13 pág. 4) quien reportó a la EPS que la señora ROJAS VELÁSCO ya no era su beneficiaria en salud como compañera permanente, lo que evidencia un profundo desconocimiento de la vida afectiva del causante, al pasar por alto que para tal calenda se había dado, cuando menos, una interrupción en la relación de pareja, aparejado con un marcado ánimo de favorecimiento hacia la demandante ROJAS VELÁSCO.

De suyo que, ante la falta de fuerza de convicción de la prueba testimonial, se impone ponderar que si bien la señora MARÍA TERESA ROJAS VELÁSCO acreditó haber sido

compañera permanente del causante desde el año 1989, lo cierto es que no acreditó que dicha relación marital de hecho hubiere perdurado sin interrupciones hasta el momento del óbito, concretamente, no acreditó que sostuvo ininterrumpidamente la calidad de compañera permanente con el causante entre el 15 de enero de 2012 y el 14 de enero de 2017, en tanto que de la documental aducida al plenario se extrae que a partir del año 2014 el causante ya no consideraba a la señora ROJAS VELÁSCO como su compañera permanente.

En cuanto la señora MARINA DEL SOCORRO BOTERO YEPES, tenemos que también se acreditó que esta sostuvo una relación de compañeros permanentes con el causante DARÍO DE JESÚS CARO FERNÁNDEZ, en tanto así se desprende de la testimonial recabada, concretamente, según los dichos de MARÍA ÁNGELA GONZÁLEZ GIRALDO (min. 1:31:00 y ss.) y CARLOS ARTURO BOTERO (min. 2:25:00 y ss.), cuando manifestaron que les constó dicha relación, y que la misma se mantuvo hasta el momento del fallecimiento del causante; no obstante ello, la misma testigo GONZÁLEZ GIRALDO reconoció que apenas conoció a la señora BOTERO YEPES desde el año 2013 (min. 1:45:00), lo que de suyo implica que a la testigo apenas le constó la convivencia de la pareja CARO BOTERO desde el año 2013, y que sus asertos en relación con la instada convivencia de la pareja CARO BOTERO a partir del año de 2010, lo fueron simplemente como testigo de oídas.

Al tiempo que el testigo BOTERO, quien manifestó ser hermano de la demandante, precisó que únicamente le constó la relación de la pareja CARO BOTERO entre el año 2010 y 2011, mientras el testigo convivía con su hermana, puesto que cuando su hermana se “organizó” con el causante ya el testigo “no cabía allá”, y si bien el testigo depuso que continuó visitando frecuentemente a la pareja CARO BOTERO (min. 2:35:00) luego de haber dejado de vivir con su hermana porque ella se “organizó” con el causante, lo cierto es que el hecho de que el testigo sea hermano de la demandante, sumado a que demostró tener escaso conocimiento sobre la situación personal del causante y de la señora BOTERO YEPES cuando se confundió con la cantidad de hijos que aquel tuvo (min. 1:05:00 y ss.), ni recordó los nombres de los hijos de ésta (min. 2:43:00); dejan entrever un ánimo de favorecimiento hacia la demandante BOTERO YEPES a pesar de su desconocimiento, lo que impide darle plena credibilidad a sus dichos.

Conforme a lo discurrido, se tiene que el dicho de MARINA DEL SOCORRO BOTERO YEPES, a pesar de haber indicado que fue compañera permanente del causante desde el año 2010, no logra tener suficiente fuerza de convicción como prueba testimonial, razón

por la cual se impone concluir que tampoco acreditó que dicha relación marital de hecho hubiere perdurado sin interrupciones entre el 15 de enero de 2012 y el 14 de enero de 2017.

El anterior análisis probatorio se fundamenta en que los testigos de oídas carecen de suficiente fuerza suasoria, al provenir su conocimiento de personas respecto a las cuales la contraparte no puede ejercer el derecho de contradicción ni el juzgador puede verificar la ciencia o razonabilidad de su dicho, o provienen inclusive de la misma parte procesal interesada que lo trajo al proceso y, por contera, se estaría posibilitando que los sujetos procesales puedan crear su propia prueba, cuyo desmerecimiento probatorio se impone en virtud de una regla de valoración de la prueba que ha establecido la jurisprudencia nacional de manera uniforme frente al testimonio *ex auditur*, como reiteró la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del SC-076 de 2007.

En el mismo sentido, las conclusiones probatorias obtenidas tienen en cuenta que lo asentado por las demandantes al absolver interrogatorio de parte o en instancias extraprocesales únicamente constituye prueba en tanto lo manifestado le sea desfavorable a la propia parte o favorable a su contraparte, conforme la regla de valoración probatoria establecida en el numeral 2 del artículo 191 del CGP, y según la máxima de la experiencia conforme a la cual las personas no mienten en lo que les desfavorece, pero sí podrían hacerlo en lo que les beneficia, a más de que darle valor probatorio a tal declaración de parte en beneficio de quien la emite, también supondría una abierta oposición al principio probatorio según el cual a la parte le está vedado confeccionar o construir su propia prueba.

Por último, el análisis de la prueba testimonial parte de lo establecido en el artículo 211 del CGP, según el cual las atestiguaciones deben valorarse de conformidad con “(...) *circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. (...) de acuerdo con las circunstancias de cada caso.*”, por lo que las aseveraciones de los testigos no deben tenerse por ciertas sin más, y sin ninguna crítica como prueba, más aún cuando lo indicado por los mismos contradicen las afirmaciones de las propias partes procesales o del causante, y cuando se logra evidenciar un ánimo de favorecimiento.

Finalmente, se precisa que las declaraciones extrajuicio que obran en el expediente (doc. 01 pág. 97 y 110) al no haber sido ratificadas, carecen del valor de convicción necesario

para dar por acreditados los hechos que se pretendieron probar, a efectos de demostrar la convivencia cualificada para ser beneficiarias de una prestación económica vitalicia a cargo del sistema general de pensiones.

Conforme a todo lo expuesto, al aplicarse los criterios de la sana crítica en racional y libre persuasión, según lo dispuesto en el artículo 61 del CPT y de la SS, del cardumen probatorio recaudado se concluye que no se probó en el plenario que las señoras MARÍA TERESA ROJAS VELÁSCO y MARINA DEL SOCORRO BOTERO YEPES hubieran conformado una comunidad de vida con vocación de permanencia y convivencia ininterrumpida con el señor DARÍO DE JESÚS CARO FERNÁNDEZ, como mínimo entre el 15 de enero de 2012 y el 14 de enero de 2017, y por tanto, no acreditaron el requisito legal aludido para ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañeras permanentes supérstites, por lo que debe confirmarse en este ítem la sentencia de primera instancia.

2.3. COSTAS

Costas en esta instancia en a cargo de MARINA DEL SOCORRO BOTERO YEPES y de MARÍA TERESA ROJAS VELÁSCO, por haberse resuelto desfavorablemente los recursos de apelación interpuestos, según lo dispuesto por el artículo 365 del CGP, a favor de PORVENIR S.A., fijándose las agencias en derecho en la suma de **\$1.160.000** equivalente a un (1) SMMLV, en proporción de la mitad de ese importe a cargo de cada una de ellas.

Las de primera instancia se confirman, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., por cuanto no fueron materia de apelación.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:


PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia materia de apelación proferida el 7 de febrero de 2022 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, según y conforme las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de MARINA DEL SOCORRO BOTERO YEPES y de MARÍA TERESA ROJAS VELÁSCO, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000, importe del cual cada una de ellas asumirá la mitad, y a favor de PORVENIR S.A. Las de primera instancia se confirman.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogándose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente electrónico al Juzgado de origen. Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario